

**De:** Darling Mz <darlingmarcela1@gmail.com>

**Enviado:** martes, 8 de agosto de 2023 4:46 p. m.

**Para:** Juzgado 15 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j15cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Cc:** Jhon Fernando Ortiz Ortiz <gestionesyseguroscales@gmail.com>; briggtte-puertas@hotmail.com <briggtte-puertas@hotmail.com>; andres.sarria@hotmail.com <andres.sarria@hotmail.com>; diego cordoba bonilla <leocordoba62@hotmail.com>; Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; liliguerrero\_22@hotmail.com <liliguerrero\_22@hotmail.com>; kvillarraga@gha.com.co <kvillarraga@gha.com.co>

**Asunto:** CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA | Dte. JORGE LUIS SARRIA VICTORIA Y OTROS | Ddo. SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y OTROS | Rad. 2023-00054-00 | KV

Señores

**JUZGADO QUINCE (15°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, VALLE DEL CAUCA**

E. S. D.

**REFERENCIA:** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**RADICADO:** 760013103015-2023-00054-00

**DEMANDANTES:** JORGE LUIS SARRIA VICTORIA Y OTROS

**DEMANDADOS:** SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y OTROS

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.061.751.492 de Popayán (C); abogada titulada y en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 263.335 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada especial del señor **DAVID SADOVNIK ROJAS**, parte demandada dentro del proceso. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, comedidamente manifiesto que procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** Declarativa de Responsabilidad Civil Extracontractual promovida por el señor JORGE LUIS SARRIA VICTORIA Y OTROS, en contra de mi representado. Y procedo a formular **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** a la compañía SBS SEGUROS COLOMBIA S.A; de acuerdo a los documentos adjuntos.

Agradezco acusar recibido.

Cordialmente,

**DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**

C.C. No. 1.061.751.492 de Popayán (C).

T.P. No. 263.335 el C. S. de la J.

Señores

**JUZGADO QUINCE (15°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, VALLE DEL CAUCA**

E. S. D.

**REFERENCIA:** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**RADICADO:** 760013103015-2023-00054-00

**DEMANDANTES:** JORGE LUIS SARRIA VICTORIA Y OTROS.

**DEMANDADOS:** DAVID SADOVNIK ROJAS Y OTROS.

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.061.751.492 de Popayán (C)., abogada titulada y en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 263.335 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada especial del señor **DAVID SADOVNIK ROJAS**, parte demandada dentro del proceso. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, comedidamente manifiesto que procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** Declarativa de Responsabilidad Civil Extracontractual promovida por el señor JORGE LUIS SARRIA en contra de mi representado, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

**I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**(SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR)**

**FRENTE AL HECHO “PRIMERO”:** Es cierto que el 02 de octubre de 2022 se presentó un accidente en la troncal 25 kilómetro 106 más 800 metros, frente a la ciudad country, jurisdicción del municipio de Jamundí, Valle.

**FRENTE AL HECHO “SEGUNDO”:** No es cierto, en este caso mi representado se desplazaba por el carril derecho de la vía, y fue el conductor de la motocicleta de placas DYA91C, quien invadió el carril de la buseta y ocasionó el accidente. Además, lo cierto es que el único medio de prueba que adosa la activa es un IPAT, no obstante, el IPAT no constituye una prueba idónea para acreditar la responsabilidad civil extracontractual. En ese sentido, si bien en el documento en mención se establece una hipótesis de ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido el 02 de octubre de 2022, en el que murió la señora María Albania Victoria, atribuible al vehículo de placas VKJ-840 a saber, la 103 “adelantar cerrando”, la misma solo es eso, una “hipótesis” que requiere ser probada en el curso del proceso, por lo tanto, establecer una hipótesis de ninguna manera corresponde a una atribución de responsabilidad. Además de lo anterior, tampoco existe otro medio de prueba

que permita corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 02 de octubre de 2022.

**FRENTE AL HECHO “TERCERO”:** A mi procurada no le consta de forma directa lo manifestado en este hecho. Pues, es cierto que el señor DAVID SADOVNIK ROJAS, se desplazaba en su vehículo de placa VKJ840 en sentido norte – sur por la troncal 25 kilómetro 106 más 800 metros, frente a la ciudad country, jurisdicción del municipio de Jamundí, Valle. Sin embargo, desconoce desde qué lugar se desplazaba el señor JORGE ELIECER SARRIA VICTORIA y la señora MARIA ALBANIA VICTORIA, en la motocicleta de placa DYA91C.

**FRENTE AL HECHO “CUARTO”:** A mi procurada no le consta de forma directa lo manifestado en este hecho. No obstante, según lo consignado en el IPAT efectivamente los uniformados que atendieron el accidente fueron los agentes de tránsito Arbey Henao Ávila y Carlos Andrés Martínez Alban, en ese sentido, fueron estos quienes levantaron el IPAT atendiendo a lo que pudieron apreciar una vez llegaron al lugar de los hechos luego de ocurrido el accidente. Sin embargo, es menester señalar que lo consagrado en dicho documento por los uniformados en mención no es cierto, puesto que mi representado les informo y aclaró que él se desplazaba por su carril y cuando escuchó un estruendo, detuvo el vehículo y se percató del accidente. Pero en ningún momento trato de adelantar algún vehículo. Debe indicarse también que, los agentes que llegan al lugar de los hechos lo hacen casi (1) hora después de ocurrido el accidente, por lo que, no puede considerarse dicho IPAT de ninguna manera como un dictamen de responsabilidad. Igualmente, es importante reseñar que el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. De acuerdo a la ley 769 de 2002, en su artículo 149.

**FRENTE AL HECHO “QUINTO. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA”:** Es cierto, teniendo en cuenta que en el IPAT se dejaron consagradas las características de la vía por parte de los agentes de tránsito que atendieron el accidente.

**FRENTE AL HECHO “SEXTO. AUTORIDADES QUE CONOCEN DEL HECHO”:** Este hecho contiene varias afirmaciones, por lo que se contestará así:

- A mi representado no le consta de forma directa lo manifestado en este hecho. No obstante, según lo consignado en el IPAT efectivamente los uniformados que atendieron el accidente fueron los agentes de tránsito Arbey Henao Ávila y Carlos Andrés Martínez Alban.
- A mi representado no le consta de forma directa lo manifestado en este hecho. No obstante, obra en el plenario la necropsia realizada al cadáver de la señora María Albina Victoria, donde, dicho sea de paso, se declaró que la occisa era ama de casa.

- Es cierto, la investigación penal se adelanta por la fiscalía 138 seccional de Jamundí, como se puede apreciar del formato de Noticia Única Criminal No. 763646000177202200769, sin embargo, debe decirse desde ya que dicho documento no constituye una declaratoria de responsabilidad ni mucho menos una condena por el delito de homicidio culposo en contra del conductor del vehículo de placa VKJ-840 conducido por mi representado.

Si bien en la demanda no se hace alusión a más hechos, me pronuncio frente a los párrafos que le siguen al hecho sexto, así:

**Frente a “NORMAS DE TRANSITO INFRINGIDAS (LEY 769 DE 2002)”:** No se trata de un hecho, sino de una transcripción de apartes normativos que, en su afán, hace el apoderado de la activa. Sin que exista medio de prueba suficiente para endilgar responsabilidad a la pasiva del presente litigio. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente a “ARTÍCULO 61. VEHÍCULO EN MOVIMIENTO”:** No se trata de un hecho, sino de una transcripción de apartes normativos que, en su afán, hace el apoderado de la activa. Sin que exista medio de prueba suficiente para endilgar responsabilidad a la pasiva del presente litigio. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente a “REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE AL CASO EN MENCIÓN”:** No se trata de un hecho, sino de apreciaciones subjetivas que hacen los demandantes. Por otro lado, como se verá más adelante, en los hechos del 02 de octubre de 2022 se vieron involucrados 2 vehículos automotores, por lo tanto, el presente caso debe ser analizado a la luz del artículo 2357 del código civil, referente a la responsabilidad probada, más no presunta como erradamente lo interpreta el togado de la activa. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente a “SOBRE LOS RESPONSABLES DIRECTOS Y TERCEROS”:** No se trata de un hecho, sino de apreciaciones subjetivas que hacen los demandantes. Nótese que los demandantes en este caso “considera” como responsables a los demandados, sin embargo, como se ha dicho antes y se verá más adelante, no existe dentro del expediente un medio de prueba idóneo, que permitan endilgar responsabilidad a la pasiva. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente a “SOBRE LA RESPONSABILIDAD”:** No se trata de un hecho, sino de apreciaciones subjetivas que hacen los demandantes.

Respecto al valor probatorio de los informes policiales de accidente de tránsito, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-429 de 2003, en donde indicó que dicho

documento se presume auténtico en relación con la persona que lo elaboró y su fecha. Sin embargo, su contenido puede ser desvirtuado en el respectivo proceso por lo que es una mera hipótesis, pues el agente de tránsito que lo elabora no presenció el accidente, veamos:

*“Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo.*

*Este informe de policía entonces, en cuanto a su contenido material, deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondientes siguiendo las reglas de la sana crítica y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten a la investigación o al proceso respectivo, como quiera que en Colombia se encuentra proscrito, en materia probatoria, cualquier sistema de tarifa legal”.*

Es claro entonces que, según la Corte Constitucional, de dicho documento sólo se puede presumir autenticidad de la persona que lo elabora y el momento en que lo hace. No obstante, el resto de información está sujeta a una futura acreditación por cuanto la persona que realiza el IPAT y el croquis, no estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos.

Por lo que, no es aceptable, el estudio del caso con base en ese artículo 2356 del CC, puesto que ambos conductores se encontraban en el desarrollo de actividades peligrosas, siendo acertado analizar el presente caso a la luz del artículo 2357 del código civil, referente a la responsabilidad probada, más no presunta como erradamente lo interpreta el togado de la activa

**Frente a “CIRCUNSTANCIAS PERSONALES”:** No le consta a mi representado la información vertida sobre la supuesta unión marital de hecho que tenía la causante con el señor JORGE ELIECER SARRIA MOSQUERA, toda vez que, son circunstancias ajenas a su conocimiento. Sin embargo, como se verá más adelante, el señor JORGE ELIECER SARRIA MOSQUERA no tiene legitimación en la causa dentro del presente proceso, por la evidente ausencia probatoria sobre su unión con la señora MARIA ALBANIA VICTORIA.

**Frente a “SOBRE LOS PERJUICIOS INMATERIALES”:** No se trata de un hecho, sino de apreciaciones subjetivas que hacen los demandantes. Además de la notoria ausencia de responsabilidad, se evidencia una tasación exorbitante ya que la parte actora solicita la suma de 100 SMLMV para el supuesto compañero permanente, la madre y los hijos y la suma de 50 SMLMV para los nietos, desconociendo que el valor máximo reconocido por la Corte Suprema de Justicia para los familiares en primer grado de la víctima fallecida en un accidente de tránsito asciende a la suma máxima de \$ 60.000.000.

Frente a “**SOBRE LOS PERJUICIOS MATERIALES**”: No se trata de un hecho, sino de apreciaciones subjetivas de la parte demandante. Además de la notoria ausencia de responsabilidad, no obra ninguna prueba útil, conducente ni pertinente que acredite que la señora María Albina se encontraba desempeñando una actividad económica al momento de su fallecimiento, que devengara algún emolumento en consecuencia de la misma y que su supuesto compañero permanente, el señor Eliecer Sarria dependiera económicamente de la occisa. Además, revisada la página del ADRES, se pudo corroborar que la señora María Albina Victoria era beneficiaria más no cotizante:





MINISTERIO DE SALUD Y  
PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL  
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	VALORES
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	48570209
NOMBRES	MARIA ALBANIA
APELLIDOS	VICTORIA
FECHA DE NACIMIENTO	09/09/1966
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA "COMFENALCO VALLE DE LA GENTE"	CONTRIBUTIVO	12/01/2007	01/10/2022	BENEFICIARIO

En ese entendido, al no demostrarse los elementos necesarios para que se configure el lucro cesante no es procedente su reconocimiento.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

**A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO** a que se declare civil y solidariamente responsables a mi representado, toda vez que: **(i)** El accidente de tránsito deviene de la responsabilidad exclusiva del conductor de la motocicleta de placas DYA91C. **(ii)** En el plenario no obran pruebas que acrediten que el hecho dañoso fue ejecutado por la demandada en mención y, **(iii)** No se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta y el daño deprecado por la accionante.

**A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: NO ME OPONGO.** Sin embargo, es preciso señalar que: **(i)** En el plenario no obran pruebas que acrediten que el hecho dañoso fue ejecutado por la demandada en mención. **(ii)** No se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta y el daño deprecado por la accionante.

**A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO** a la presente pretensión debido a que es consecuencial a la anteriores pretensiones y como quiera que estas no tiene vocación de prosperidad por resultar improcedentes, esta también debe ser desestimada.

**A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO** a que se condene a los demandados al pago de costas, por sustracción de materia, no encontrándose soportada la responsabilidad que

se predica, tampoco podrían salir avante dichas peticiones. Por consiguiente, además de negar las pretensiones del libelo, ruego imponer la correspondiente condena en costas y agencias en derecho a la parte actora.

**A LA PRETENSIÓN QUINTA: ME OPONGO** a que se condene, con ocasión de la declaratoria de responsabilidad, al pago de los perjuicios discriminados en el escrito genitor así:

- **Frente al lucro cesante**

**ME OPONGO** a que se condene al pago de emolumento alguno a título de lucro cesante toda vez que al interior del plenario no obra ninguna prueba útil, conducente ni pertinente que acredite que la señora María Albina se encontraba desempeñando una actividad económica al momento de su fallecimiento, que devengara algún emolumento en consecuencia de la misma, incluso se confiesa que la misma era ama de casa. Tampoco existe prueba de que, su supuesto compañero permanente, el señor Eliecer Sarria dependiera económicamente de la occisa. Además, revisada la página del ADRES, se pudo corroborar que la señora María Albina Victoria era beneficiaria más no cotizante:



MINISTERIO DE SALUD Y  
PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL  
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DAIOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	48570209
NOMBRES	MARIA ALBANIA
APELLIDOS	VICTORIA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA "COMFENALCO VALLE DE LA GENTE"	CONTRIBUTIVO	12/01/2007	01/10/2022	BENEFICIARIO

En ese entendido, al no demostrarse los elementos necesarios para que se configure el lucro cesante no es procedente su reconocimiento.

- **Frente al daño moral**

**ME OPONGO** a que se condene al pago de cifra alguna por concepto de daño moral a los demandantes toda vez que, en primer lugar no se acredita la responsabilidad de mi representado el señor David Sadovnik en la ocurrencia del accidente de tránsito del 02 de octubre de 2022, que devino en el deceso de la señora María Albina Victoria y, en segundo lugar, se evidencia una tasación exorbitante ya que la parte actora solicita la suma de 100 SMLMV para el supuesto compañero permanente, la madre y los hijos y la suma de 50 SMLMV para los nietos desconociendo que el valor máximo reconocido por la Corte Suprema de Justicia para los familiares en primer grado de la víctima fallecida en un accidente de tránsito asciende a la suma máxima de \$60.000.000.

### III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Conforme lo dispone el artículo. 206 del Código General del Proceso y, sin que ello signifique aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi procurada, respetuosamente presento objeción al Juramento Estimatorio de la demanda, como quiera que: i) no existe prueba del perjuicio que se reclaman por concepto de lucro cesante, como se confiesa en el escrito de demanda la señora María Albania Victoria, era ama de casa. (ii) En el presente caso, no se ha estructurado la responsabilidad que pretende endilgarse a los demandados, como quiera que no existe un medio de prueba idóneo para ello.

En ese orden de ideas, objeto el juramento estimatorio presentado por el Demandante, indicando inicialmente que, no se hará referencia a los perjuicios extrapatrimoniales, toda vez que el citado artículo estipula expresamente que: *“El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales”*. En virtud del precitado, en esta objeción no se hará alusión a los mismos.

En cuanto a la categoría de daños patrimoniales o materiales, específicamente el lucro cesante solicitado en la demanda, objeto su cuantía en atención a que la parte Demandante no cumplió su carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso, puesto que no aportó prueba detallada del perjuicio cuya indemnización deprecia.

No resulta procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago en favor de la parte Demandante de sumas de dinero por concepto del lucro cesante, toda vez que no hay prueba dentro del expediente que justifique la suma solicitada. Ello por cuanto, al interior del expediente no se evidencia prueba útil, conducente y pertinente que acredite que la señora María Albina desempeñaba alguna actividad económica antes de su deceso y devengara algún emolumento como consecuencia, por el contrario, se evidencia en el acta técnica de inspección de cadáver que la mentada era ama de casa. Adicionalmente, no prueba el supuesto compañero permanente, el señor Eliecer Sarria que era dependiente económicamente de la señora María Albina cuando estaba viva. Además, revisada la página del ADRES, se pudo corroborar que la señora María Albania Victoria era beneficiaria más no cotizante:



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL  
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud  
Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NUMERO DE IDENTIFICACION	48570209
NOMBRES	MARIA ALBANIA
APELLIDOS	VICTORIA
FECHA DE NACIMIENTO	09/09/88
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACION EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA "COMFENALCO VALLE DE LA GENTE"	CONTRIBUTIVO	12/01/2007	01/10/2022	BENEFICIARIO

En este orden de ideas, es preciso reiterar que la parte Demandante tenía entre sus mandatos toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sobre este particular ha establecido lo siguiente:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.1”* (Subrayado fuera del texto original)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(…) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)”2* (Subrayado fuera del texto original)

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. MP. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299.  
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. MP Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736.

En conclusión, no es procedente el reconocimiento de lucro cesante, en tanto que se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la occisa, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se probó que señor Eliecer Sarria dependiera económicamente de ésta. De modo tal que, al no encontrarse probados los perjuicios que alega en el juramento estimatorio, es jurídicamente improcedente su reconocimiento tal y como lo han señalado los pronunciamientos jurisprudenciales citados en líneas precedentes.

Por las razones antes expuestas, me opongo enfáticamente al juramento estimatorio de la demanda.

#### IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

##### **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO**

##### **1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD – NO ACREDITACIÓN DE LA PRUEBA DE NEXO CAUSAL.**

La parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 02 de octubre de 2022, hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo de placa VKJ840, pues la activa basa sus infundadas pretensiones de forma única y exclusiva en el Informe Policial de Accidente de Tránsito, no se deja consignada la versión de los hechos de la supuesta testigo ocular y, en todo caso, carece de virtualidad una responsabilidad como la pretendida por los demandantes.

Uno de los elementos indispensables para declarar la existencia de responsabilidad civil extracontractual, es la acreditación de la ocurrencia de hecho dañoso. Este elemento debe demostrarse de forma clara y fehaciente, pues es la base sobre la cual se cimienta la obligación indemnizatoria. Es así como la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. De esa manera, el reclamante en acción extracontractual deberá enfilear su causa y labor demostrativa a **“aducir la prueba de los factores constitutivos de responsabilidad extracontractual, como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad”** (CSJ SC del 9 de feb. de 1976). (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, se traduce en que la parte que solicita la indemnización de un perjuicio no debe conformarse con acreditar la ocurrencia del hecho y del daño que presuntamente reportó con ocasión al accidente, correspondiendo a la parte demandante acreditar la culpa y el nexo causal en las acciones desarrolladas por su contraparte. A su vez, existe consenso

en la Jurisprudencia y la Doctrina en cuanto a que, la Responsabilidad Civil Extracontractual pretende la reparación de perjuicios derivados de un hecho dañoso producido por un tercero, configurándose un vínculo jurídico entre el causante y el afectado. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia ha determinado los presupuestos para la viabilidad de la acción de reparación por Responsabilidad Civil Extracontractual, saber “a) la comisión de un hecho dañino, b) la culpa del sujeto agente y c) la existencia de la relación de causalidad entre uno y otra”<sup>3</sup>

Ahora bien, la parte actora fundamenta todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 02 de octubre de 2022, el cual carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte actora, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad. Igualmente, es importante reseñar que **el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad**, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

**Artículo 149:** *El informe contendrá por lo menos:*

*Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.*

*Clase de vehículo, número de la placa y demás características.*

*Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.*

*Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.*

*Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.*

*Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.*

*Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.*

*Descripción de los daños y lesiones.*

*Relación de los medios de prueba aportados por las partes.*

*Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.*

**[...]**

**Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes.** (negrita fuera del texto original).

---

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC13925-2016. Radicado: 050013103003-2005-00174-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

**ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO.** *Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.*

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que **el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis**, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y, por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

En contraste con lo expuesto, en el caso que nos ocupa, se tiene que la parte actora pretende que se declare la existencia de responsabilidad civil en cabeza de la parte pasiva de la acción, debido a los supuestos perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 02 de octubre de 2022 de conformidad con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, cuando tal carece de la posibilidad de acreditar y sustentar las aspiraciones de la activa en este trámite. Así pues, es claro cómo al interior de este trámite no se haya acreditado el nexo de causalidad, toda vez que no obra al interior del plenario elementos probatorios que realmente logren acreditar la existencia responsabilidad por parte del vehículo de placa VKJ-840. Lo anterior es aún más evidente en atención a que el documento allegado al proceso no se diligenció de forma detallada pues, no se indica qué fue lo que dijo la testigo ocular de los hechos acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente.

Adicionalmente, el artículo 167 del Código General del Proceso, determinó que es deber de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Por tanto, es claro cómo el incumplimiento de tal carga procesal consecuentemente deviene en el fracaso de sus pretensiones, y no es de recibo que el extremo actor pretenda la prosperidad de sus pretensiones con asiento en su exclusivo dicho. En consecuencia, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de la prueba. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del accidente recae en cabeza del asegurado.

En conclusión, es claro como al interior del presente trámite no existe prueba alguna de que los perjuicios presuntamente padecidos por los demandantes hayan devenido en forma alguna del proceso de conducción del vehículo de placa VKJ840, como quiera que el Informe Policial de Accidente Tránsito, único elemento a partir del cual la activa pretende se endilgue responsabilidad a los demandados, es un documento carece de la capacidad y/o virtualidad a fin de acreditar la responsabilidad en la comisión de un accidente de tránsito. Por tanto, al ser clara la ausencia de acreditación de los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual que se pretende endilgar a la pasiva consecuentemente las pretensiones de la demanda se encuentran abocadas a su fracaso.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

## **2. CONCURRENCIA DE CULPAS**

En el presente proceso se configura la concurrencia de culpas por cuanto ambos involucrados en el accidente de tránsito a saber, el señor Sarria Mosquera en su calidad de conductor de la motocicleta de placa DYA91C y el señor David Sandovnik Rojas conductor del vehículo de placas VKJ840, ejercían la actividad de conducir un vehículo la cual está clasificada por la ley como una actividad peligrosa.

En ese sentido es imperativo que el despacho analice el porcentaje de culpa de los involucrados en el accidente a efectos de tomar una decisión apegada a derecho. Es por ello que, y sin que ello implique aceptación de responsabilidad de ninguna índole en contra de mi representada, toda vez que a partir de la jurisprudencia de las altas Cortes, para el análisis de este tipo de eventos en los que puede llegar a existir concurrencia de culpas en el ejercicio de actividades peligrosas, corresponderá al Juez examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el supuesto daño, con el fin de evaluar la equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas generadoras del daño; estableciendo de ese modo, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los involucrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

*“ARTÍCULO 2357. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”*

Ahora bien, cuando el daño es consecuencia de la convergencia de roles riesgosos realizados por la víctima y el agente, el análisis de la contribución de cada uno de los involucrados en la producción del hecho no debe ser desmesurado ni subjetivo, pues es fundamental establecer la circunstancia incidental que corresponde en este caso. Ha

retomado entonces la Corte Suprema de Justicia<sup>4</sup> la tesis de la intervención causal, consistente en que la graduación de culpas cuando se está en presencia de actividades peligrosas concurrentes impone al juzgador el deber de examinar a plenitud las conductas desplegadas por las partes involucradas, para precisar la incidencia en el daño, y consecuentemente, determinar la responsabilidad de uno y otro.

*“Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...)”<sup>5</sup>*

Así entonces, cuando la causa del daño corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de alguno de los sujetos, habría un único responsable; sin embargo, distinto es, cuando concurren ambas actividades peligrosas (emanadas en este caso de la conducción de vehículos) como causa del daño, determinando la contribución de los involucrados, que implica atenuar el deber de repararlo.

Frente a este aspecto, es menester señalar que, el comportamiento del señor Sarria Mosquera al estar ejecutando una actividad peligrosa (conducir), amplió la esfera de riesgo, contribuyendo con su comportamiento a la producción del daño, situación que, genera un atenuante al deber de reparación, es decir, en este caso en concreto, el comportamiento de aquel al conducir el vehículo de placas DYA91C, después del debate probatorio se acredita esa contribución en la ocurrencia del hecho y por ello, la consecuencia que se deriva es que se atenúe el deber a reparar, o, la responsabilidad a asumir. Así pues, cabe señalar que, el grado de interrelación jurídica entre las causas que dieron origen al accidente y sus consecuencias, deben ser analizadas por el Despacho de manera tal que constituya un atenuante al deber de reparación que endilga la parte actora como exclusiva del demandado.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho se sirva declarar probada la presente excepción, al determinarse que el señor Sarria Mosquera al estar conduciendo, es decir, ejecutando una actividad peligrosa, contribuyó efectivamente a la generación del daño.

---

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de junio de 2018, Radicado: 11001-31-03-032-2011-00736-01.

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 24 de agosto de 2009, Radicado: 2001-01054-01; igualmente reiterado en sentencias del 26 de agosto de 2010, Radicado: 2005-00611-01, y del 16 de diciembre de 2010, Radicado: 1989-000042-01.

### 3. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL SEÑOR JORGE ELIECER SARRIA MOSQUERA AL NO ACREDITARSE SU CONDICIÓN DE COMPAÑERO PERMANENTE DE LA SEÑORA MARÍA ALBINA VICTORIA

En el caso en marras se configura la falta de legitimación en la causa por activa en atención a que el extremo actor no acredita con prueba suficiente la supuesta unión marital de hecho que existía entre la señora María Albina Victoria y el señor Jorge Eliecer Sarria Mosquera en el momento de los hechos. Ello por cuanto el único documento que allegan para el efecto es una declaración extrajuicio de fecha 02 de diciembre de 2022 en la que el señor Sarria declara que tenía una unión marital de hecho con la causante desde hacía 40 años, pero, no allega ningún otro documento que respalde los allí manifestado. En ese sentido, debe el honorable despacho proceder a declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Vásquez Sotelo por los argumentos expuestos.

La legitimación en la causa ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. El Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19753, magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“La legitimación en la causa por activa hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.*

*Según lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no podrá acceder a las pretensiones de la demanda. Si bien la falta de legitimación en la causa se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada a manera de excepción pueda ser resuelta en esta oportunidad procesal, toda vez que, según los dictados del numeral 6 del artículo 180 del CPACA., en el curso de la audiencia inicial, el juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva”.<sup>6</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Del análisis jurisprudencial señalado y del estudio realizado al acervo probatorio aportado

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 19753. M.P. Mauricio Fajardo Gómez

al proceso, se refleja una evidente ausencia de legitimación por activa por parte del señor Sarria, puesto que en ningún momento se observa prueba que acredite la relación afectiva con la señora María Albina, que pretende hacer valer. En ese orden de ideas, al no existir prueba idónea en el expediente que acredite el matrimonio o la Unión Marital de Hecho entre ella y el mencionado señor, no es procedente el reconocimiento de ningún emolumento a su nombre.

La Ley 979 de 2005 estableció los mecanismos por los cuales se declaran las uniones maritales de hecho, únicos medios idóneos de prueba para acreditar la condición de compañero permanente, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 2o. El artículo 4o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: Artículo 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.
2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.”

Sin embargo, en este caso, no existe prueba idónea de una unión marital entre el señor Sarria y la señora María Albina Victoria, ello por cuanto, tal como menciona la norma, no se allega escritura pública de notario, acta de conciliación suscrita por los sujetos o sentencia judicial, por el contrario, se limita el extremo actor a adjuntar un acta de declaración juramentada, que además tiene fines meramente extraprocesales, para acreditar sus afirmaciones. Dicho lo anterior, no basta con la simple prueba documental declarativa de los intervinientes pues, la jurisprudencia ha sido enfática al señalar que para que exista la unión marital de hecho los supuestos compañeros permanentes debe acreditar tres elementos a saber, comunidad de vida, permanencia y singularidad, tal como se transcribe a continuación:

*“Ha sido constante la jurisprudencia al señalar que son elementos para conformación de la unión marital de hecho una comunidad de vida, permanente y singular, de los cuales ha dicho que; (i) la **comunidad de vida** refiere a esa exteriorización de la voluntad de los integrantes de conformar una familia, manifestado en la convivencia, brindándose respeto, socorro y ayuda mutua, compartiendo metas y asuntos esenciales de la vida, <<(…) esa comunidad de vida debe ser firme, constante y estable, pues lo que el legislador pretende con esta exigencia es relieves que la institución familiar tiene, básicamente, propósitos de durabilidad, de estabilidad y de trascendencia>>, la cual se encuentra integrada por unos elementos <<(…) fácticos, objetivos como la*



*convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de permanencia, de unidad y la affectio maritalis (...)>> (ii) la **permanencia**, que refiere a la forma de vida en que una pareja idónea comparte voluntariamente y maritalmente, guiada por un criterio de estabilidad y permanencia, en contraposición de las relaciones esporádicas, temporales u ocasionales y; (iii) la **singularidad** indica que únicamente puede unir a dos personas idóneas, <<atañe con que sea solo esa sin que exista otra de la misma especie, cuestión que impide sostener que la ley colombiana dejó sueltas las amarras para afloraran en abundancia uniones maritales de hecho.”<sup>7</sup>*

Es claro entonces que la Corte considera de vital importancia que dos sujetos que pretendan alegar la existencia de una unión marital de hecho acrediten la comunidad de vida, la permanencia y la singularidad. En ese sentido, no puede desde ninguna perspectiva aceptar el despacho una mera declaración extrajudicial como prueba de los elementos constitutivos de la unión marital de hecho pues, se estaría aceptando dicha relación legal solo mediante los dichos del demandante efectuado ante una notaría. Así pues, no obra al interior del expediente ninguna prueba que acredite que efectivamente la señora María Albania y el señor Sarria tenían una comunidad de vida, que esta fuera permanente y singular.

Es menester señalar que tratándose de una relación personal que no le consta a mi mandante, la carga de la prueba está en cabeza del extremo actor por lo cual, debía allegar prueba útil, conducente y pertinente en los términos del artículo 165 del Código General del Proceso que acreditara la relación jurídica que afirman tener. En ese entendido, se evidencia que el material probatorio allegado por los demandantes es deficiente en su cometido de probar la existencia de la unión marital de hecho, por lo tanto, al no acreditarse debe quedar excluido de toda pretensión el señor Jorge Eliecer Sarria.

En conclusión, debido a que el extremo actor no aporta prueba que respalde sus dichos y permita acreditar los elementos de la unión marital de hecho, debe tenerse este hecho como no probado y, por lo tanto, debe declarar el juez que el señor Sarria no tiene legitimación en la causa por activa pues no prueba la relación jurídica sustancial de la cual parte su reclamación. Por lo tanto, el señor Sarria no está legitimado para ejercer la acción que nos ocupa, por no demostrar la relación afectiva que pretende hacer valer en este proceso. Razón por la cual, no es jurídicamente procedente declarar indemnización alguna a su cargo, por los hechos de este litigio.

#### **4. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES DENOMINADOS “DAÑO MORAL”.**

---

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC4361-2018 de 12 de octubre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.

Pese a que claramente no se encuentra acreditada la responsabilidad que pretenden atribuirle a la parte pasiva dentro del presente proceso, se formula esta excepción en el sentido de indicarle al Despacho que, los perjuicios extrapatrimoniales por concepto de daño moral que pretenden el demandante resultan a todas luces improcedentes por cuanto solicitan 100 SMLMV para los familiares en primer grado de consanguinidad y 50 SMLMV para los familiares de segundo grado de consanguinidad, cuando el límite máximo reconocido por la Corte Suprema de Justicia es de \$60.000.000, monto ostensiblemente menor. Debe recordarse que la indemnización del daño moral solo procede cuando existe responsabilidad de los demandados y como quiera que en este caso no se acreditó tal responsabilidad, claramente no hay lugar a su reconocimiento. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la tasación propuesta por el demandante se efectuó basándose en la jurisprudencia emanada del Consejo de Estado y no en la de la Corte Suprema de Justicia que, frente al tema, maneja baremos completamente diferentes.

La Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan equivocados y exorbitantes. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala de Casación Civil, para la tasación de los pretendidos perjuicios se ha fijado en tope indemnizatorio de \$60.000.000 para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

*“Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación de cara a las trágicas e inesperadas circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez Zuluaga, se fija en la suma de sesenta millones de pesos (\$60.000.000) el monto de los perjuicios morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la víctima”<sup>8</sup>* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>9</sup>, se ha establecido un rango entre \$50.000.000 y \$60.000.000 como tope máximo para resarcir los perjuicios morales sufridos como consecuencia de la muerte de un ser querido. Además, este tope solo se aplica a los familiares en primer grado de consanguineidad y civil. De lo anterior, también cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha establecido sus baremos en la unidad de Salarios Mínimos Legales Mensuales vigente si no que lo ha hecho en cantidades ciertas que solo varían si la Corte lo considera necesario en pronunciamientos futuros.

---

<sup>8</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Radicado Rad: 05001 31 03 016 2009-00005-01. Marzo 7 de 2019

<sup>9</sup> Óp. Cit. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia. Expediente 11001-31-03-028- 2003-00833-01.

En conclusión, desde cualquier punto de vista se evidencia que la tasación del daño moral solicitado por el demandante es exorbitante por varios motivos: (i) Supera los baremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia a saber, \$60.000.000 para los padres, hijos y compañero permanente y \$30.000.000 para los nietos y, (ii) La tasación se hizo en salarios mínimos sin traducirla a una cifra cierta. De esa manera, desborda todo límite y criterio jurisprudencialmente establecido. En consecuencia, deberá desestimarse la exorbitante tasación de perjuicios propuesta por el extremo actor.

Por lo anterior, respetuosamente ruego al Honorable Juez tener por probada esta excepción.

5. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE

En el caso objeto de estudio no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro toda vez que, el extremo actor no acreditó que la señora María Albania Victoria se encontraba laborando para el momento en que acaeció el accidente de tránsito y tampoco están probados sus ingresos, por el contrario, en el Acta de Inspección Técnica a Cadáver – FPJ – 10 se manifestó que la señora Albina era ama de casa, es decir, no ejercía ninguna actividad productiva que le generara ingresos económicos. Además, revisada la página del ADRES, se pudo corroborar que la señora María Albina Victoria era beneficiaria más no cotizante:



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DAFOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	48570209
NOMBRES	MARIA ALBANIA
APELLIDOS	VICTORIA
FECHA DE NACIMIENTO	01/10/2022
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	SANTIAGO DE CALI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
AFILIADO FALLECIDO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA "COMFENALCO VALLE DE LA GENTE"	CONTRIBUTIVO	12/01/2007	01/10/2022	BENEFICIARIO

En ese sentido y afectos de lograr una mayor claridad, se procederá a dividir esta excepción de la siguiente manera:

4.1. improcedencia del Lucro Cesante Futuro.

Frente al particular lo primero que parece necesario advertir es que en el caso objeto de estudio no es procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio toda vez que para ello se requiere prueba útil, conducente y pertinente que acredite la Señora María Albina

percibía algún ingreso para el momento de su muerte y no solo eso, sino que, además, su compañero permanente era dependiente económicamente de la occisa. En ese entendido, es claro que no es procedente reconocimiento alguno a este título. Frente al lucro cesante futuro la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

*“El lucro cesante actual no ofrece ninguna dificultad en cuanto hace a la certidumbre del daño ocasionado, pues, como viene de explicarse, se trata de la ganancia o del provecho no reportado al patrimonio del interesado, como hecho ya cumplido. **En cambio, en el lucro cesante futuro, precisamente, por referirse a la utilidad o al beneficio frustrado cuya percepción debía darse más adelante en el tiempo, su condición de cierto se debe establecer con base en la proyección razonable y objetiva que se haga de hechos presentes o pasados susceptibles de constatación, en el supuesto de que la conducta generadora del daño no hubiere tenido ocurrencia, para determinar si la ganancia o el provecho esperados, habrían o no ingresado al patrimonio del afectado.** En oportunidad reciente, la Sala reiteró que ‘[e]n tratándose del daño, y en singular, del lucro cesante, la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión’; precisó igualmente que ‘[l]as más de las veces, el con fin entre la certeza y el acontecer ulterior, es extremadamente lábil, y la certidumbre del daño futuro sólo puede apreciarse en un sentido relativo y no absoluto, considerada la elemental imposibilidad de predecir con exactitud el desenvolvimiento de un suceso en el porvenir, por lo cual, se remite a una cuestión de hecho sujeta a la razonable valoración del marco concreto de circunstancias fácticas por el juzgador según las normas jurídicas, las reglas de la experiencia, la lógica y el sentido común (...)’; y recordó que ‘la jurisprudencia de esta Corte cuando del daño futuro se trata y, en particular, del lucro cesante futuro, ha sido explícita ‘en que no es posible aseverar, con seguridad absoluta, como habrían transcurrido los acontecimientos sin la ocurrencia del hecho’, acudiendo al propósito de determinar ‘un mínimo de razonable certidumbre’, a ‘juicios de probabilidad objetiva’ y ‘a un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la existencia material del lucro cesante y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daño en la medida en que obre en autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en*

*probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido*<sup>10</sup> (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

En ese sentido, es claro que para la Corte no basta una simple afirmación de que se dejará de percibir cierto emolumento, dicha afirmación debe ser respaldada por pruebas que demuestren la afectación que produjo la lesión padecida frente al supuesto detrimento respecto a, para el caso concreto, los salarios que dejaría de percibir. En ese sentido, es claro que en el caso objeto de estudio es menester que se acrediten dos situaciones, la prima que la occisa desarrollaba una actividad económica antes de su fallecimiento y que el compañero permanente era dependiente económicamente de la misma razón por la cual, el fallecimiento de la mentada degenero en un lucro cesante para el demandado. En ese entendido, no es procedente que el despacho conceda la petición incoada.

#### 4.2. Improcedencia del lucro cesante consolidado

Por otro lado, resulta improcedente reconocer perjuicio alguno a título de lucro cesante consolidado toda vez que, para ello es necesario demostrar de forma inequívoca que la occisa a saber, la señora María Albina, desarrollaba alguna actividad económica para el momento de su fallecimiento, que con ocasión a la misma devengara algún emolumento y que el señor Jorge Eliecer Sarria dependiera económicamente de la causante. En ese sentido, no es procedente conceder suma alguna a título de lucro cesante consolidado.

Para empezar, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

Para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

(...) en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.  
(...) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se

---

<sup>10</sup> Corte Suprema de Justicia, *sentencia del 9 de septiembre de 2010, expediente No. 17042- 3103-001-2005-00103-01*

afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...)

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.”<sup>11</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

“La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (...)

*En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima*

---

<sup>11</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008.

directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

**Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.**

**La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.**<sup>12</sup> (subrayado y negrilla fuera del texto original)

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, no logre probar que antes de la producción del daño devengaba algún emolumento por el desarrollo de un trabajo o alguna actividad económica y, en el caso de muerte de la víctima directa, que el demandante era económicamente dependiente de este. En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte Demandante, por cuanto, no prueba que tuviera un ingreso con anterioridad al accidente de tránsito razón por la cual, no hay prueba del emolumento dejado de percibir y por lo tanto, se viola el principio de certeza de su existencia.

En conclusión: (i) no se encuentra probada de una dependencia económica por parte del señor Sarria frente a la occisa razón por la cual no hay lugar al reconocimiento del lucro cesante futuro, (ii) no se prueba que la señora María Albani desarrollara una actividad económica antes de su fallecimiento, por el contrario, se encuentra acreditado que era una ama de casa, es decir, dependía económicamente de otra persona y, (ii) no se acredita el ingreso que percibía antes de que acaeciera el accidente, en atención a lo mencionado, no es procedente el reconocimiento de lucro cesante consolidado pues no hay certeza de la cuantía a indemnizar ni del derecho que le asiste al peticionante. En consecuencia, no hay lugar a que el Despacho proceda con el reconocimiento de indemnización a título de Lucro Cesante consolidado y futuro para el peticionario.

---

<sup>12</sup> Consejo de Estado. Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019. Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia

Lo anterior, habida cuenta que por no encontrarse probado un factor determinante para el reconocimiento de esta tipología de perjuicios, su reconocimiento es a todas luces improcedente por ausencia de pruebas que acrediten que la señora María Albania trabajaba antes de su muerte y que el señor Sarria dependía económicamente de ella, ello sin mencionar que no se acredita que efectivamente fueran compañeros permanentes. En ese sentido, es claro que las pretensiones encaminadas a obtener un reconocimiento por estos conceptos no están llamadas a prosperar, puesto que no siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual del Lucro Cesante consolidado y futuro.

Por todo lo anterior, solicito señor juez tener por probada esta excepción.

## **6. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS**

Conforme a lo dispuesto en el Art. 282 del C.G.P., solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante acción directa, incluyendo la prescripción de las acciones por la senda ordinaria.

### **MEDIOS DE PRUEBA**

#### **FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE**

**RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.** El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

“(...) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)”

Entonces, cabe resaltar que Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente esta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa enumero los siguientes:



- DECLARACIÓN EXTRAPROCESAL No.4375, DE LA NOTARIA 04 DE CALI, PRESENTADA POR EL SEÑOR JULIO JORGE GRUESO ARBOLEDA.
- DECLARACIÓN EXTRAPROCESAL No.4374, DE LA NOTARIA 04 DE CALI, PRESENTADA POR EL SEÑOR JORGE ELIECER SARRIA MOSQUERA.

## 1. Interrogatorio de parte

- 1.1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la señora **INÉS VICTORIA**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La señora **INÉS VICTORIA**, podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 1.2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **ANDRÉS FELIPE SARRIA VICTORIA**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **ANDRÉS FELIPE SARRIA VICTORIA**, podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 1.3. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **JORGE LUIS SARRIA VICTORIA**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **JORGE LUIS SARRIA VICTORIA**, podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 1.4. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **JORGE ELIECER SARRIA MOSQUERA**, en su calidad de demandante, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El señor **JORGE ELIECER SARRIA MOSQUERA**, podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- 1.5. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio al representante legal de la demandada la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA DE ROBLES S.A. (TRANSUR)**, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El representante legal podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en la contestación de la demanda **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA DE ROBLES S.A. (TRANSUR)**.

## **2. Declaración de parte**

Al tenor de lo preceptuado en el Art. 198 del C.G.P., respetuosamente solicito ordenar la citación del DAVID SADOVNIK ROJAS para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda.

## **3. Testimonios**

Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y siguientes del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio del señor JORGE DAVID TENORIO ALMEIDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.144.199.923, quien fue testigo presencial de los hechos y que podrá ser notificado al correo electrónico [transpuertodavid@gmail.com](mailto:transpuertodavid@gmail.com) y al número 3225220416, cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar las circunstancias de como ocurrieron los hechos del pasado 02 de octubre de 2022.

## **4. Intervención en documentales y testimonios**

Adicionalmente con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación de documentos y otras pruebas solicitadas.

## **ANEXOS**

1. Poder especial
2. Cedula de ciudadanía del señor David Sadovnik Rojas
3. Cedula y tarjeta profesional de la suscrita.

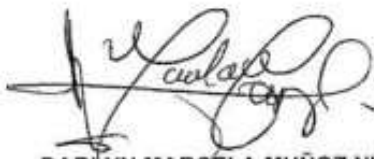
## **NOTIFICACIONES**

La parte actora en la dirección consignada en el escrito demandatorio. Los demás demandados, en la dirección que indiquen en sus respectivas contestaciones.

Mi representado David Sadovnik Rojas. recibirá notificaciones en la Calle9B #50-100 apto 302, torre H. Dirección electrónica: [liliquerrero\\_22@hotmail.com](mailto:liliquerrero_22@hotmail.com), Celular. 3136487876.

Por parte del suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali;  
correo electrónico [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com), Celular. 3113888049.

Cordialmente,



**DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**  
C.C No. 1.061.751.492 de Popayán (Cauca)  
T.P. No. 263.335 del C.S. de la J

Señores:

**JUZGADO QUINCE (15°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, VALLE**  
E.S.D


**DEMANDANTE:** JORGE LUIS SARRIA VICTORIA Y OTROS  
**DEMANDADO:** DAVID SADOVNIK ROJAS Y OTROS  
**RADICACIÓN:** 760013103015-2023-00054-00

**DAVID SADOVNIK ROJAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.629816 vecino de cali y correo electrónico \_\_\_\_\_ comedidamente manifiesto que **CONFIERO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a la doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, mayor y vecina de Popayán, con C.C. No. 1.061.751.492 de Popayán, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 263.335 del Consejo Superior de la Judicatura, y dirección electrónica darlingmarcela1@gmail.com, para que en mi nombre y representación asuma mi representación judicial en el proceso de la referencia, se notifique del auto admisorio de la demanda y/o del llamamiento en garantía, los conteste, proponga excepciones, formule llamamientos, solicite pruebas, interponga recursos y realice todas las actuaciones necesarias e inherentes a su calidad.

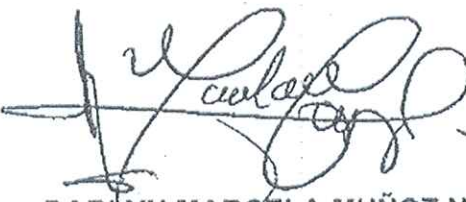
La apoderada queda facultada para notificarse, recibir, desistir, conciliar, transigir, sustituir, reasumir, objetar el juramento estimatorio de la cuantía de la demanda y en general, para realizar todas las acciones necesarias e indispensables para el éxito del mandato a su cargo, etc.

La doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES** recibirá notificaciones en la dirección electrónica darlingmarcela1@gmail.com y podrá ser contactado al celular 3113888049.

Cordialmente,

  
**DAVID SADOVNIK ROJAS**  
CC. No. 16.629816

Acepto:



**DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**  
C.C No. 1.061.751.492 de Popayán (C) 2012  
T.P. No. 263.335 del C.S. de la J

**NOTARIA 15 DEL CIRCUITO DE CALI**  
**CLAUDIA FERNANDA BARRETO**  
NOTARIA 15 DEL CIRCUITO DE CALI

<b>NOTARIA QUINCE DE CALI</b>	
<b>DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO</b>	
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012	
Ante <b>CLAUDIA FERNANDA BARRETO NOTARIA (E) 15 DEL CIRCULO DE CALI</b> Compareció:	
<b>SADOVNIK ROJAS DAVID</b>	
y exhibió la <b>C.C. 16629816</b>	
3909-5ea840f5	
quien declaró que el contenido del documento es cierto y verdadero y que la firma que en él aparece es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a <a href="http://www.notariaenlinea.com">www.notariaenlinea.com</a> para verificar este documento.	
Para constancia se firma: Fecha: 2023-07-21 15:10:31	
PODER	
	
	
<b>CLAUDIA FERNANDA BARRETO</b> NOTARIA (E) 15 DEL CIRCULO DE CALI RESOLUCION 05444 DEL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023.	
	
Cod. lu7yd	
	



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.629.816**

**SADOVNIK ROJAS**

APELLIDOS

**DAVID**

NOMBRES



  
FIRMA

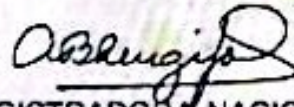


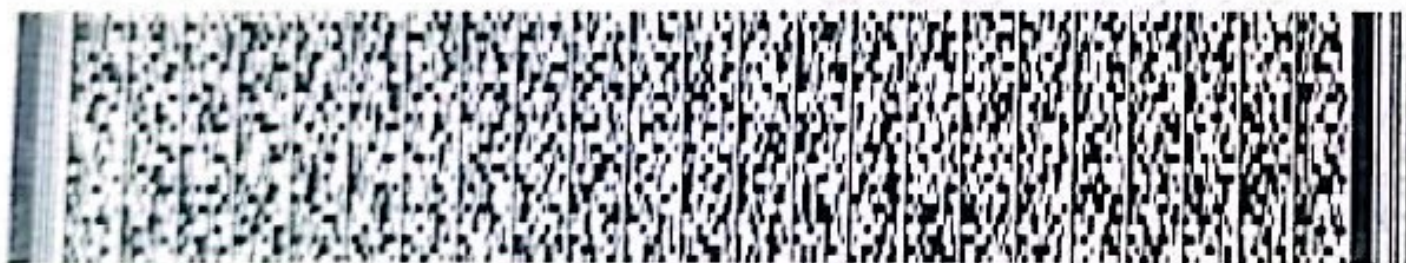
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUL-1959**  
**CALI**  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.70** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**06-OCT-1977 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-3100100-65137102-M-0016629816-20060124

0034106024H 01 200120885



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.751.492**

**MUÑOZ NIEVES**  
APELLIDOS

**DARLYN MARCELA**  
NOMBRES

*[Signature]*  
FIRMA

*[Portrait Photo]*

*[Fingerprint]*  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1992**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.69**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-SEP-2010 POPAYAN**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

*[Barcode]*

P-1100100-00260672-F-1061751492-20101019 0024441738A 1 35225843

  
Consejo Superior  
de la Judicatura

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO**



NOMBRES:  
**DARLYN MARCELA**

APELLIDOS:  
**MUÑOZ NIEVES**



FECHA DE GRADO  
**21 de agosto de 2015**

FECHA DE EXPEDICION  
**25 de septiembre de 2015**

PRESIDENTE CONSEJO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
**WILSON RUÍZ OREJUELA**



CONSEJO SECCIONAL  
**CAUCA**

TARJETA N°  
**263335**

UNIVERSIDAD  
**DEL CAUCA**

CEDULA  
**1061751492**

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO  
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA  
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971  
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR  
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO  
NACIONAL DE ABOGADOS.**